

FERNANDO ATRIA
EUGENIO BULYGIN
JOSÉ JUAN MORESO
PABLO E. NAVARRO
JORGE L. RODRÍGUEZ
JUAN RUIZ MANERO

LAGUNAS EN EL DERECHO
Una controversia sobre el derecho
y la función judicial

MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.
MADRID 2005 BARCELONA

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
INTRODUCCIÓN	
<i>Eugenio Bulygin</i>	11
1. SOBRE LAS LAGUNAS	
<i>Fernando Atria</i>	15
2. CREACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO	
<i>Eugenio Bulygin</i>	29
La doctrina tradicional.....	29
Normas generales y normas individuales	32
La justificación de la decisión judicial.....	33
Lagunas normativas.....	35
La teoría de Atria	37
Creación judicial del derecho.....	43
3. CREACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO: ENTRE FORMALISMO Y ESCEPTICISMO	
<i>Fernando Atria</i>	45
Sistemas normativos institucionalizados y jurisdicción.....	51
Lagunas normativas y discreción judicial	57
Conclusión: buscando El Dorado	70
4. EN DEFENSA DE EL DORADO. RESPUESTA A FERNANDO ATRIA	
<i>Eugenio Bulygin</i>	73
Modificación de la norma y adecuación de su aplicación	73

	<u>Pág.</u>
Caracterización de la función judicial	76
Lagunas normativas y discreción judicial.....	77
Análisis de los ejemplos.....	79
El problema de la relevancia.....	80
Lagunas normativas y conductas no reguladas.....	82
5. CASOS DIFÍCILES, LAGUNAS EN EL DERECHO Y DISCRECIÓN JUDICIAL	
<i>Pablo E. Navarro</i>	87
Introducción.....	87
Desacuerdo jurídico y teoría del derecho	88
Casos genéricos, casos individuales y casos judiciales	91
Lagunas en el derecho y discreción judicial.....	95
Lagunas en el derecho y relevancia normativa.....	97
Conclusiones	100
6. ALGUNAS CONCEPCIONES DEL DERECHO Y SUS LAGUNAS	
<i>Juan Ruiz Manero</i>	103
Introducción.....	103
Sobre las relaciones entre casos y reglas.....	104
Una visión alternativa	116
7. LA IMAGEN ACTUAL DE LAS LAGUNAS EN EL DERECHO	
<i>Jorge L. Rodríguez</i>	127
Introducción.....	127
Positivismo, bivalencia y lagunas	129
Casos sin regulación jurídica y discrecionalidad	134
La paradoja de la pareja escocesa	139
Lagunas normativas y casos no regulados.....	144
Lagunas axiológicas y un dilema para el positivismo.....	150
8. RÉPLICA: ENTRE JUECES Y ACTIVISTAS DISFRAZADOS DE JUECES	
<i>Fernando Atria</i>	159
Función judicial, la discreción y el positivismo jurídico	159
Los límites del derecho	162
De los casos: genéricos, específicos y judiciales	165
La idea de «laguna normativa»	168
La caracterización de la jurisdicción	170
Decisiones judiciales: normativas y declarativas	172
Modificar una norma/adecuar su aplicación.....	175
Entre formalismo y escepticismo	177

	<u>Pág.</u>
9. A BRILLIANT DISGUISE: ENTRE FUENTES Y LAGUNAS	
<i>José Juan Moreso</i>	185
Introducción	185
El positivismo jurídico de nuevo	186
Las lagunas en <i>Normative Systems</i>	192
Límites del derecho y discreción judicial	201
Conclusiones	202
REFERENCIAS	205
RELACIÓN DE AUTORES	211
ÍNDICE ANALÍTICO	213

INTRODUCCIÓN

Eugenio BULYGIN

Universidad de Buenos Aires

Este libro es insólito por varias razones. En primer lugar, no es común que un libro tenga seis autores. Y no se trata de una colección de artículos, sino de un libro escrito por seis personas distintas. Sin embargo, y ésta es la segunda nota inusual, aunque todos los capítulos fueron escritos individualmente, están conectados temáticamente entre sí. Y es que se trata de una discusión entre seis profesores de filosofía del derecho provenientes de diversas universidades de Chile, Argentina y España. La discusión versa sobre algunos temas centrales de la filosofía del derecho actual, tales como los distintos tipos de lagunas en el derecho, en particular, las lagunas normativas y las lagunas axiológicas, la función de los jueces, la fundamentación de las sentencias judiciales, la discrecionalidad judicial, el positivismo jurídico, el papel de los principios y de las reglas en el derecho y muchos otros temas ligados entre sí.

La historia del origen de este libro tampoco es común. Sus raíces datan de hace más de treinta años, concretamente de 1971, fecha en que aparece *Normative Systems*, libro que parece haber tenido alguna influencia en la filosofía jurídica de los últimos años. Mucho tiempo después Fernando ATRIA, actualmente profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, publica su libro *On Law and Legal Reasoning*, en el cual critica la concepción de las lagunas de ALCHOURRÓN y BULYGIN y atribuye su error a una inadecuada caracterización de la función jurisdiccional. Un resumen de estas críticas se encuentra en el capítulo 1 de este libro. En el capítulo 2 BULYGIN contesta las críticas de ATRIA

y el capítulo 3 contiene una réplica de ATRIA, que, a su vez, es contestada en el capítulo 4.

ALCHOURRÓN y BULYGIN sostuvieron en *Normative Systems* que en el caso de una laguna normativa, es decir, en un caso genérico que no está regulado por las normas generales, el juez puede resolver discrecionalmente el conflicto entre el actor y el demandado en un caso individual correspondiente a ese caso genérico. Decir que el juez tiene discrecionalidad significa que puede hacer lugar a la demanda o rechazarla, pero en ambos casos la norma individual que dicta en su sentencia (al obligar al demandado a hacer lo que el actor pretende o al permitir al demandado no hacerlo) tiene que estar fundada en una norma general, so pena de ser arbitraria. Como tal norma general por hipótesis no forma parte del derecho, el juez debe “crearla”. El que el juez “crea” la norma general que resuelve el caso de laguna normativa quiere decir que esa norma es producto de la valoración del juez. Esta valoración no necesariamente es expresión de sus preferencias personales: puede estar basada en valoraciones compartidas por el grupo social o en normas morales que el juez cree objetivas. Cualquiera que sea la decisión del juez, ésta tiene que contener una norma individual que resuelva el conflicto y esta norma individual —para no ser arbitraria— debe estar fundada en una norma general.

Para ATRIA, en cambio, una explicación positivista del derecho no puede concluir que en casos de laguna el juez tiene discreción, sino que debe de rechazar la demanda. La alternativa, cree ATRIA, lleva al positivista a una postura escéptica respecto del deber del juez de fallar conforme a derecho. La función judicial no consiste en solucionar conflictos, sino en determinar en forma dotada de autoridad el hecho de la violación de reglas primarias (HART) y la resolución de conflictos es un mero subproducto de la aplicación de las reglas o normas jurídicas. En consecuencia, cuando no se ha violado ninguna norma —como ocurre en el caso de una laguna normativa— el juez está obligado a rechazar la demanda. Y para ello no necesita ninguna norma general, porque al rechazar la demanda no dicta ninguna norma individual.

Otros puntos de discrepancia son la distinción entre lagunas normativas y casos no regulados que el derecho no pretende regular y la distinción entre la adecuación de la norma al caso que no es suficientemente “normal” y la no aplicación de una norma jurídica por el juez que la considera muy injusta. Estos temas llevan a ATRIA, para quien hay una conexión necesaria entre el derecho y la moral en el plano de la aplicación de las normas jurídicas a casos particulares, al rechazo del positivismo jurídico (defendido por BULYGIN), cuyo eje central es la distinción entre el derecho que es y el derecho que debe ser. Más aún, ATRIA sostiene que el positivismo no puede dejar de caer en alguna de las dos posiciones que pretende evitar: formalismo o escepticismo ante las reglas.

Los tres capítulos siguientes constituyen otros tantos comentarios a los temas de debate entre ATRIA y BULYGIN.

Pablo NAVARRO, profesor de la Universidad del Sur, Bahía Blanca, Argentina, introduce en su intervención (capítulo 5) la interesante noción de *caso judicial*, distinto de caso genérico y caso individual y muestra que un caso individual sometido al conocimiento de un juez puede, por razones institucionales, tener una solución diferente de la que las normas generales atribuyen al caso genérico correspondiente. Aduce además varios argumentos a favor de la discreción judicial y hace muy interesantes observaciones sobre el tema de la relevancia y la distinción entre lagunas y casos no regulados. Termina mostrando que los argumentos de ATRIA contra el positivismo no son concluyentes.

Juan RUIZ MANERO, profesor de la Universidad de Alicante, argumenta con vehemencia en el capítulo 6 contra el positivismo jurídico, tanto de ALCHOURRÓN y BULYGIN, como de RAZ. Considera que la caracterización de la relación entre reglas y casos y las definiciones de laguna y antinomia o contradicción normativa de *Normative Systems*, que BULYGIN insiste en defender, no sólo están muy alejadas de las creencias compartidas por los juristas, sino fuertemente contrastantes con estas últimas. En contraposición a tales deformaciones, RUIZ MANERO presenta una versión alternativa de cómo funciona el derecho en sus dos niveles, el de las reglas y el de los principios. Los principios constituyen las razones subyacentes a las reglas y sirven para su justificación.

En el capítulo 7, el profesor de la Universidad de Mar del Plata, Jorge L. RODRÍGUEZ, se ocupa de aclarar varios malentendidos que subyacen a los ataques al positivismo jurídico. Sostiene que la crítica de Dworkin, quien ataca las tesis de las fuentes sociales y de la discrecionalidad judicial (compartida en alguna medida por ATRIA), está basada en la falta de una distinción adecuada entre normas y proposiciones normativas. Frente al desafío de ATRIA de distinguir entre las lagunas y los casos que el derecho no regula y no pretende regular, RODRÍGUEZ sostiene que la caracterización de las lagunas normativas en *Normative Systems* permite trazar la distinción entre *a)* lagunas, *b)* casos no regulados que, sin embargo, pueden tener alguna relevancia jurídica y *c)* casos jurídicamente irrelevantes, que el derecho no regula, ni pretende regular. Muestra una interesante semejanza estructural entre lagunas normativas y lagunas axiológicas y señala la necesidad de distinguir entre el problema de la identificación del derecho y el de la aplicación de las normas jurídicas para resolver casos individuales. El positivismo se limita a sostener que el primer problema no requiere de ninguna valoración moral, pero no pretende decir que el derecho debe ser aplicado sin valorar su contenido.

El capítulo 8 contiene una extensa réplica de ATRIA, quien —aunque se encuentra en desventaja numérica— se defiende con gran brío

de los ataques de BULYGIN, NAVARRO y RODRÍGUEZ y propina severos golpes a sus adversarios.

El libro termina con un Epílogo a cargo de José Juan MORESO, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. MORESO comienza señalando que el tema de las lagunas no es más que un disfraz (*a brilliant disguise*) y lo que está en juego en el trasfondo de la discusión es la viabilidad del positivismo jurídico como teoría del derecho, que BULYGIN, NAVARRO y RODRÍGUEZ afirman y ATRIA y RUIZ MANERO niegan. Sin enrolarse en ninguna de las dos posiciones, MORESO propone una solución intermedia, que si bien no cabe calificar de neutral, es al menos equidistante de los dos bandos. Es la posición del llamado positivismo suave o incluyente. Esta postura permite a Moreso coincidir con ATRIA en que el derecho es un sistema institucional regulativo y no autónomo que recurre en la esfera de su aplicación a razones sustantivas de carácter moral. En coincidencia con RUIZ MANERO, MORESO acepta el doble nivel —el de las reglas y el de los principios jurídicos— en que se desenvuelve el derecho. Pero al mismo tiempo, acepta —si bien en sendas versiones debilitadas— las tesis de las fuentes sociales y de la discreción judicial. Con lo cual no queda excluida la posibilidad de que en vez de quedar bien con las dos partes contrincantes despierte la ira de ambas.

Tal es el contenido de este libro. Queda para el lector la ardua tarea de decidir cuál de los dos bandos sale victorioso de esta confrontación. Pero a diferencia del fútbol lo verdaderamente importante en una discusión filosófica no es perder o ganar, sino aclarar los problemas y en este sentido el presente libro constituye un buen ejemplo.

El texto «Sobre las lagunas» de Fernando ATRIA es una traducción de las páginas 76-86 del libro del mismo autor *On Law and Legal Reasoning* (Oxford: Hart Publishers, 2002), y se reproduce aquí con la amable autorización de Hart Publishers. Fernando ATRIA también desea agradecer el apoyo financiero del Fondo Nacional Chileno de Desarrollo Científico y Tecnológico, por cuanto sus contribuciones a este volumen son parte de la ejecución del proyecto FONDECYT 1010461 que dicho fondo financia.

1. SOBRE LAS LAGUNAS

Fernando ATRIA

Universidad Adolfo Ibáñez

Hay tres respuestas que una teoría del derecho podría dar al problema de las lagunas:

- 1) Los sistemas jurídicos son necesariamente completos.
- 2) Los sistemas jurídicos necesariamente tienen lagunas.
- 3) La cuestión de si existen lagunas en un sistema jurídico es contingente.

Comencemos con 1), cuyo defensor más famoso fue Hans Kelsen. Kelsen creía que, para cualquier caso concebible:

«O bien el tribunal determina que el demandado o el acusado ha cometido el delito determinado en una norma jurídica general, según afirma el demandante privado o el acusador público y, por ende, que habría lesionado con su conducta una obligación que le estaba impuesta por el orden jurídico, en cuyo caso el tribunal tiene que hacer lugar a la demanda o querrela, ordenando la sanción estatuida por esa norma jurídica general; o bien el tribunal determina que el demandado o acusado no ha cometido el delito, no habiendo lesionado, por ende, con su conducta ninguna obligación que el orden jurídico le impusiera [...] Entonces corresponde que el tribunal rechace la demanda o absuelva al acusado, es decir, que ordene que no se debe imponer sanción alguna contra el demandado o acusado»¹.

¹ Kelsen, *Teoría pura del Derecho* (1960): 251-252.

El derecho es siempre aplicable: lo que se denomina “laguna” en el derecho no es una laguna *jurídica*, sino una situación en la cual la aplicación del derecho a un caso particular es tan absurda o injusta que el juez asume que el derecho no debe ser aplicado al caso. En las palabras de KELSEN:

«La existencia de una laguna sólo es admitida cuando la falta de semejante norma jurídica es considerada por el órgano de aplicación como indeseable desde un punto de vista jurídico-político, poniendo de lado, por esta razón jurídico-política, la aplicación lógicamente posible del derecho válido, en tanto visto como inconveniente o injusto por el órgano de aplicación².

De acuerdo con ALCHOURRÓN y BULYGIN, el ejemplo de KELSEN es instructivo porque él trató de apoyar su argumento sobre la inexistencia de lagunas de dos maneras diferentes. ALCHOURRÓN y BULYGIN sostienen que éstas son *las* dos maneras en que esta tesis podría ser justificada. Las consideraremos en cierto detalle.

Para que un sistema sea cerrado (sin lagunas) debe contener alguna regla de clausura de acuerdo a la cual si el sistema no asigna una propiedad deóntica a cierta acción le asigna una propiedad deóntica a esa acción. El candidato obvio para esa regla (o principio) de clausura es lo que ALCHOURRÓN y BULYGIN llaman el “principio de prohibición”: todo lo que no está prohibido está permitido. De acuerdo al significado que le sea asignado a la palabra “permitido”, ALCHOURRÓN y BULYGIN distinguen dos versiones de este principio, una *débil* y una *fuerte*. En la versión fuerte, “permitido” significa positivamente permitido, mientras en la versión débil significa sólo no-prohibido. En esta versión (cuando “permitido” sólo quiere decir “no-prohibido”) el principio de prohibición «es analítico y, por consiguiente, necesariamente verdadero», porque afirma que si una acción no está prohibida entonces no está prohibida³.

A pesar de que el principio de prohibición en su versión débil es necesariamente verdadero (*i. e.*, es lógicamente verdadero sostener que es parte de cualquier sistema jurídico), para ALCHOURRÓN y BULYGIN es compatible con la existencia de lagunas, «porque no cierra ningún sistema normativo y, por consiguiente, no excluye la posibilidad de sistemas incompletos»⁴. De hecho, como ellos afirman, «una laguna es un caso en el cual hay una acción *p* que está débilmente permitida (y no permitida en sentido fuerte) por el sistema» (*NS* 126; *IMCJS* 178). La versión fuerte del principio de prohibición, por otro lado, es suficientemente fuerte como para cerrar cualquier sistema, pero

² *Ibid.*, 255.

³ *NS* 125; *IMCJS*, 178.

⁴ *NS* 126; *IMCJS*, 178.

«lejos de ser necesario, es una proposición contingente» (NS 127; *IMCJS* 179). Como KELSEN no ofreció ningún argumento para mostrar cómo y por qué una norma podía tener «la misteriosa propiedad de pertenecer a todos los sistemas jurídicos» (NS 132; *IMCJS* 187), ellos pueden ser cerrados o abiertos de acuerdo a si contienen, de hecho, un principio fuerte de prohibición. Esto implica rechazar 1), la tesis de KELSEN, y aceptar 3).

En la obra temprana de KELSEN, de acuerdo con ALCHOURRÓN y BULYGIN, la tesis de que los sistemas jurídicos eran necesariamente cerrados se basaba sobre la versión fuerte del principio de prohibición. Precisamente para evitar tener que sostener que había una norma que existía en todos los sistemas jurídicos posibles, KELSEN abandonó la versión fuerte y adoptó, en la segunda edición de su *Teoría Pura del Derecho*, la versión débil del principio de prohibición. Para ALCHOURRÓN y BULYGIN KELSEN, habiendo hecho esta concesión, ya no podía sostener que los sistemas jurídicos eran necesariamente cerrados, y debió aceptar la posibilidad de lagunas aunque fuera a regañadientes:

«Es enteramente posible que la conducta no prohibida, y en este sentido, permitida de un individuo [...] se contraponga a la de otro individuo cuya conducta tampoco está prohibida y, por ende, sea permitida. Tendremos entonces [...] un conflicto de intereses que el orden jurídico no previene; ningún orden jurídico puede prevenir todos los conflictos de intereses»⁵.

ALCHOURRÓN y BULYGIN ven en esto un reconocimiento implícito de la existencia de lagunas, porque «¿qué otra cosa son las lagunas si no son “conflictos de intereses que el orden jurídico no previene”?»⁶. Esto es muy implausible. Considérese el caso siguiente: no hay regla del derecho escocés que especifique dónde una pareja de recién casados debe pasar sus vacaciones. Imaginemos que él quiere ir a Francia, pero ella quiere ir a Sudáfrica. Ellos tienen un conflicto de intereses, porque (imaginemos adicionalmente) ambos tienen que y quieren viajar juntos. Imaginemos por último que él la demanda, y solicita a la jueza que falle en su favor imponiéndole a ella la obligación de ir a Francia. ¿Qué dirá la jueza? Ella probablemente dirá que no existe ninguna regla aplicable, por lo que debe rechazar la demanda⁷.

⁵ KELSEN, *Teoría pura del Derecho* (1960): 252.

⁶ *IMCJS*, 187.

⁷ Para una posición similar, véase RUIZ MANERO, *Jurisdicción y normas*: 42-3: «de acuerdo [CON KELSEN], en caso de inexistencia de norma que determine el *status* deóntico de la conducta del demandado, el juez sí tiene una obligación específica: la de rechazar la demanda. KELSEN ciertamente distingue entre el permitir en sentido negativo [*i. e.*, débil] y el permitir en sentido positivo [fuerte], pero ello no implica, en su opinión, que sólo cuando haya una permisón positiva de la conducta del demandado tenga el juez la obligación específica de rechazar la

El ejemplo muestra que hay dos cuestiones diferentes que ALCHOURRÓN y BULYGIN no distinguen: *a)* ¿qué dispone el derecho escocés en relación con el lugar en que una pareja de recién casados debe pasar sus vacaciones?; *b)* ¿cuál es la solución correcta para este caso? En términos de RAZ, *a)* es una pregunta sobre un enunciado jurídico puro, mientras *b)* es una sobre enunciados jurídicos aplicados. ALCHOURRÓN y BULYGIN creen que una respuesta a *a)* es una respuesta a *b)*:

«Cuando hay una laguna, ¿qué debe hacer el juez? ¿Debe fallar contra el demandado o rechazar la demanda? La respuesta es clara: si el sistema primario no dice nada sobre la acción en disputa, *el juez no tiene una obligación específica* ni de fallar contra el demandado ni de rechazar la demanda. Sólo tiene la obligación genérica de decidir el caso y cumple su obligación decidiendo en una de dos formas posibles: a favor del demandado o rechazando la demanda (suponiendo que éstas son las dos únicas formas de decidir). En otras palabras, el juez tiene la obligación de decidir, esto es, de admitir o rechazar la demanda, pero no tiene una obligación ni de admitirla ni de rechazarla» (NS 156-57; IMCJS 215).

El error de ALCHOURRÓN y BULYGIN, en mi opinión, se explica parcialmente por su caracterización de la función jurisdiccional⁸. Sin ofrecer argumentos adicionales, ellos asumen que “solucionar conflictos de intereses” es la “función primaria” de los tribunales (NS 147; IMCJS 204). Si esto es aceptado, entonces hay un argumento poderoso para sostener que todo conflicto de intereses no solucionado por el sistema jurídico es una laguna. En otras palabras, un *fiat* definitorio arbitrario constituye el vínculo entre *a)* y *b)* para ALCHOURRÓN y BULYGIN.

demanda, mientras que cuando se trate de una permisión negativa tenga sólo la obligación genérica de juzgar y cumpla con ella juzgando de cualquiera de las dos maneras posibles. Dicho de otra forma, la inexistencia de una norma que determine el *status* deóntico de la conducta del demandado tiene para KELSEN [...] exactamente las mismas consecuencias que la existencia de una norma que autorice positivamente la conducta correspondiente». No es claro, sin embargo, si RUIZ MANERO está o no de acuerdo con ALCHOURRÓN y BULYGIN en relación con la posibilidad de lagunas. Él sostiene que «Alchourrón y Bulygin tienen razón, desde luego, en su afirmación [...] de que las lagunas son “conflictos de intereses no solucionados por el orden jurídico”; pero no parecen advertir que puede admitirse la existencia de “conflictos de intereses no solucionados por el orden jurídico” sin que ello implique en modo alguno la admisión de la posibilidad de lagunas» (*ibid.*, 44). No soy capaz de ver cómo RUIZ MANERO puede compatibilizar estas dos afirmaciones: si las lagunas *son* “conflictos de intereses... (etc.)”, entonces ciertamente decir que existen esos conflictos de intereses es lo mismo que decir que existen esas lagunas. Como quedará claro luego, en mi opinión, la solución correcta es reconocer que la existencia de conflictos de intereses no previstos por el derecho no es suficiente para la existencia de una laguna.

⁸ Digo “parcialmente” porque incluso si esta caracterización es aceptada habría, a mi juicio, espacio para rechazar la conclusión de ALCHOURRÓN y BULYGIN. Pero si su caracterización de los órganos jurisdiccionales es errada, como creo que es (al menos si es ofrecida como una caracterización *lógica*) la importancia de distinguir *a)* de *b)* es más evidente.

No quiero sostener que las decisiones judiciales, de hecho, no solucionan, en la mayoría de los casos, conflictos de intereses (una idea, incidentalmente, que ha sido desarrollada por la reflexión dogmática sobre el derecho privado en países capitalistas). Pero desde un punto de vista lógico o conceptual, que es el asumido por ALCHOURRÓN y BULYGIN, ésta es una manera equivocada de caracterizar la función judicial. ALCHOURRÓN y BULYGIN toman la función que los jueces tienen en el contexto de sociedades liberales modernas y suponen que ésta es la función estructural que tienen en relación con el funcionamiento de sistemas jurídicos institucionalizados.

De hecho, ni siquiera en los sistemas jurídicos occidentales modernos es siempre el caso que las decisiones judiciales solucionan conflictos de intereses, porque no siempre hay un conflicto a la espera de ser resuelto. En muchos países, por ejemplo, una decisión judicial es requerida para condenar a un acusado de un delito penal, incluso si éste ha confesado ser autor del delito: el hecho de que el acusado esté dispuesto a ser sancionado no siempre hace de la decisión judicial algo superfluo. Pero incluso si de alguna manera uno pudiera encontrar un conflicto en estas circunstancias, eso no sería suficiente para justificar la posición de ALCHOURRÓN y BULYGIN. Mirjan DAMAŠKA, por ejemplo, ha sostenido que el vínculo entre jurisdicción y resolución de conflictos es fuerte en países liberales pero menos importante en sistemas en los que el derecho es visto como un mecanismo de implementación de decisiones políticas⁹.

¿Cómo hemos de caracterizar la función judicial, si no es sobre la base de la resolución de conflictos? Una respuesta plausible es caracterizarla como lo hizo Hart al introducir su noción de reglas secundarias de adjudicación. Desde este punto de vista, lo que es distintivo de la actividad jurisdiccional no es que soluciona conflictos de intereses, sino que provee «determinaciones autoritativas del hecho de la violación de reglas primarias»¹⁰. La resolución de conflictos aparece como una función característica de los órganos jurisdiccionales sólo si se supone que ésta es la función característica de las reglas que los tribunales aplican. Pero si esas reglas tienen como finalidad principal una diferente (implementar decisiones políticas, maximizar la utilidad, etc.) entonces la resolución de conflictos podrá ser entendida como un simple sub-producto de la aplicación de las reglas.

Si esto es correcto, no es posible transitar de *a*) a *b*), al menos no sin una justificación adicional. Para ver esto, puede ser útil considerar un ejemplo propuesto por ALCHOURRÓN y BULYGIN, y comentado por Aleksander PECZENIK:

⁹ DAMAŠKA, *The Faces of Justice and State Authority*: 84; véase adicionalmente OLLR, 216 s.

¹⁰ HART, *The Concept of Law*: 97.

«Supongamos que una ley dispone que: 1) la restitución de un inmueble es obligatoria, si el adquirente está de buena fe, la transferencia es hecha a título oneroso y el transferente está de mala fe; y 2) que la restitución del inmueble es obligatoria si la transferencia se hace a título gratuito. Supongamos ahora que el transferente está de buena fe, y la transferencia se hace a título oneroso pero el adquirente está de mala fe. ¿Es la restitución obligatoria? La norma no provee una respuesta. Existe una laguna. Uno puede establecer la existencia de esas lagunas de una manera objetiva, valorativamente neutra, pero para integrarlas uno debe complementar la ley con una norma adicional, como la siguiente: “una acción está permitida, si no está explícitamente prohibida por el derecho” [...] Una norma como ésa puede encontrarse en la ley o en otra fuente del derecho. En caso contrario, la integración de la laguna exige que uno tome una decisión valorativa¹¹».

En relación con la pregunta *a*), podemos decir con seguridad: el derecho argentino (al menos en 1971) no se refiere a la restitución de bienes inmuebles por el adquirente cuando el adquirente la adquirió de mala fe (llamemos a esta propiedad del caso A), el transferente estaba de buena fe B) y la transferencia fue hecha a título oneroso C). Podemos desde luego, como sostiene PECZENIK «establecer la existencia de esas lagunas de una manera objetiva, valorativamente neutra».

Las cosas son, sin embargo, diferentes si de lo que se trata es de responder la segunda pregunta, *b*). Aquí el problema es ¿qué debe hacer el tribunal?¹² La respuesta genérica es: aplicar el derecho. Supongamos que el dueño legítimo demanda al poseedor exigiendo la restitución. No hay regla aplicable, en el ejemplo de ALCHOURRÓN-BULYGIN-PECZENIK (ésta fue nuestra conclusión en relación con la pregunta *a*) más arriba). En consecuencia, el juez debe decir «no hay regla que deba ser aplicada», es decir, no hay regla cuya aplicación sea provocada por las propiedades ABC. Pero esto es precisamente lo que el demandado sostendrá, que él no tiene obligación de restituir porque no hay regla cuya aplicación sea condicional respecto de las propiedades ABC. Como hemos supuesto que la corte tiene el deber de «proveer determinaciones autoritativas de la violación de reglas primarias», la corte debe decir que en un caso como éste no hay regla que deba ser aplicada, *i. e.*, que debe fallar a favor del demandado (ésta era *precisamente* la conclusión de KELSEN). Se sigue de lo anterior que la existencia de una laguna no es suficiente para establecer que el tribunal tiene discreción para solucionar el caso. Lue-

¹¹ PECZENIK, *On Law and Reason*: 25.

¹² En *OLLR 72* había estipulado que el significado de la pregunta «¿cuál es la solución jurídicamente correcta para este caso?» es idéntico al de la pregunta «¿qué debe hacer el juez en este caso?».